

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)" Art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)" Art. 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans

**Queja** 2504124  
**Materia** Hacienda pública  
**Asunto** Solicitud bonificación IVTM. Falta de respuesta.

## RESOLUCIÓN DE CONSIDERACIONES A LA ADMINISTRACIÓN

### 1 Tramitación de la queja

1.1. En fecha 28/10/2025, el promotor de la queja presentó un escrito ante esta institución al que se le ha asignado el número de queja 2504124.

En su escrito de queja manifestaba, sustancialmente, que con fecha 20/03/2024, presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Santa Pola solicitando la bonificación del 80% del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para el vehículo de su propiedad matrícula (...), por tratarse de un vehículo catalogado y registrado como histórico. Que no recibió respuesta a esta solicitud y en el mes de mayo del año 2024, recibió el impuesto de circulación del referido vehículo sin aplicar el 80% de bonificación. Por tal motivo, con fecha 14/05/2024, recurrió ante el Ayuntamiento de Santa Pola la liquidación del IVTM (nº 240003722890) emitida por el órgano tributario erróneamente al vehículo matrícula (...), solicitando que se elimine esa matrícula y se emita una liquidación correcta de la matrícula (...), con la correspondiente bonificación por vehículo histórico. Que no ha obtenido respuesta de ninguno de los dos escritos dirigidos a la administración local.

1.2. El 18/11/2025, admitida la queja a trámite, se requirió al Ayuntamiento de Santa Pola, para que dado el tiempo transcurrido nos informase, en el plazo de un mes, sobre el estado actual de tramitación del recurso de reposición presentado por el promotor de la queja ante ese Ayuntamiento en fecha 14/05/2024, sin que hasta la fecha se haya recibido el referido informe.

### 2 Conclusiones de la investigación

#### 2.1 Derechos y libertades públicas relacionadas con la presente queja

En el presente expediente de queja se plantea la demora excesiva en resolver el recurso de reposición interpuesto por el promotor de la queja en fecha 14/05/2024, solicitando que se emita la liquidación correcta del vehículo matrícula (...) con la correspondiente bonificación de la cuota del IVTM (80%), por tratarse de un vehículo catalogado como histórico, según consta acreditado en el escrito presentado en fecha 20/03/2024, por parte del Ayuntamiento de Santa Pola.

En este sentido, resulta de aplicación el art. 124.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que al regular la obligación de resolver de forma expresa por parte de la Administración todos los recursos de reposición interpuestos por los ciudadanos, establece que "El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes".

Este plazo, según la legislación vigente, se contará, en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que el recurso haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, extremo que ocurrió, en el presente caso el día 14/05/2024.

El derecho a obtener una respuesta sobre lo peticionado a la Administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo. Claramente lo formula la exposición de motivos de la citada Ley 39/2015 “el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal, sino la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado”.

La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal. Estamos, pues, ante una de las manifestaciones legislativas del derecho a obtener una resolución expresa dentro de plazo.

La obligación administrativa de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente, dimana directamente del mandato constitucional del Art. 103 de una Administración eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley y según los principios garantizados por la Constitución española en su Art. 9.3.

En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 de marzo de 2001, que “es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, SSTC 6/1986, de 21 de enero, FF. 3; 204/1987, de 21 de diciembre, F. 4; 180/1991, de 23 de septiembre, F. 1; y 86/1998, de 21 de abril, FF. 5 y 6), que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (Art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los Arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE.”

Por ello, nuestro Legislador Autonómico, al regular esta institución en la Ley 2/2021, de 26 de marzo, le atribuye, en su Art. 33.2.c), la específica función de velar y controlar que la Administración resuelva, en tiempo y forma, las solicitudes presentadas y los recursos planteados en su ámbito competencial.

Del mismo modo, el Art. 9.2 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana reconoce que “todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable”.

A su vez, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Derecho a la Buena Administración) establece que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».

La vigencia de las disposiciones analizadas consideramos que impone a las administraciones un plus de exigencia a la hora de abordar el análisis de los escritos que les dirijan los ciudadanos y darles respuesta expresa, motivada, en plazo y con pie de recursos, en el marco del derecho a una buena administración.

Este derecho a una buena administración se conforma así como un derecho básico y esencial de la ciudadanía valenciana, que se integra, como mínimo, por los derechos de la persona a que las administraciones públicas atiendan en un plazo razonable las peticiones que esta les formule, dando una respuesta expresa y motivada a las mismas, de manera que el ciudadano pueda conocer en todo momento cuál es la posición de la administración concernida respecto de su problema, para, en caso de discrepancia, poder ejercer las acciones de defensa de sus derechos que estime más adecuadas.

En efecto, en el presente caso, resulta evidente que el Ayuntamiento de Santa Pola, no ha resuelto el recurso de reposición solicitando la liquidación correcta del IVTM, al vehículo matrícula H-1704-BBG, aplicando la bonificación por vehículo histórico, que presentó el autor de la queja en fecha 14/05/2024, es decir ha transcurrido un año y siete meses, se trata de una demora excesiva e inadmisibles, ya que el plazo legal máximo para resolver este tipo de recursos es de un mes.

## **2.2 Conducta de la administración**

El artículo 39.1.a) de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, establece lo siguiente:

“Se considerará que existe falta de colaboración con el Síndic de Greuges cuando, en los plazos establecidos para ello, se produzcan los siguientes hechos:

a) No se facilite la información o la documentación solicitada (...).”

En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Santa Pola, todavía no ha remitido a esta institución el informe requerido con fecha 18/11/2025, incumpléndose el plazo legal máximo de un mes (artículo 31.2 de la citada Ley 2/2021).

Si el Ayuntamiento de Santa Pola, se niega a colaborar con el Síndic de Greuges, se hará constar en las resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y extraordinarios que emita el Síndic de Greuges ante Les Corts Valencianes, en cuyo caso se indicará también la identidad de las personas responsables.

La persistencia en las actitudes obstaculizadoras que derive en un comportamiento hostil o sistemáticamente entorpecedor de las investigaciones llevadas a cabo por el Síndic de Greuges dará lugar a un informe especial de carácter monográfico, en el que se identificará a las autoridades y al personal que sean responsables de lo sucedido.

### 3 Consideraciones a la Administración

**Primero: RECOMENDAMOS al AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA** que, teniendo en cuenta el periodo de tiempo transcurrido desde la interposición del recurso de reposición de fecha 14/05/2024, solicitando la liquidación correcta del IVTM, al vehículo matrícula (...) de su propiedad, aplicando la bonificación del 80% por tratarse de un vehículo catalogado como histórico, proceda de manera urgente a resolverlo de forma expresa y notificarlo al autor de la queja.

**Segundo: RECORDAMOS al AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA EL DEBER LEGAL** de colaborar con el Síndic de Greuges, facilitando la información solicitada y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales efectuados.

Según la ley que regula esta institución, las Administraciones a las que van dirigidas nuestras consideraciones están obligadas a enviarnos, en el plazo máximo de un mes, un informe donde manifiesten si aceptan estas consideraciones. Si las aceptan, deberán indicar las medidas que van a adoptar para cumplirlas. Si no las aceptan, deberán justificar su respuesta.

Finalmente, esta Resolución se notificará a todas las partes y se publicará en [www.elsindic.com/actuaciones](http://www.elsindic.com/actuaciones).

Ángel Luna González  
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana